

Taller de coyuntura

Informe quincenal de tendencias

15 de diciembre 2014

La voz de las encuestas

La aprobación del gobierno y de la propia Presidenta han caído sostenidamente en estos últimos meses, superada por los índices de desaprobación, tal como consistentemente lo reflejan diversas encuestas de opinión (Adimark refleja una caída de 12 puntos y la desaprobación sube 30 puntos; en Plaza pública cae 14 puntos y la desaprobación sube 28 puntos; en la última encuesta CEP cae 12 puntos y la desaprobación sube 14 puntos. A estas habría que agregar la encuesta de la Fundación Humana a mujeres, que muestra idéntica tendencia), originando todo tipo de interpretaciones, muchas de las cuales aparecen contaminadas por intereses políticos o ideológicos.

Es evidente que no se puede dramatizar con el resultado de estas encuestas a nueve meses de gobierno. Sobre todo si se recuerda que un fenómeno parecido se vivió durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet y el gobierno anterior enfrentó una situación igual o peor en la segunda mitad de su mandato.

Pero tampoco se trata de ignorar una señal de alerta preocupante, que obliga por igual al gobierno y al oficialismo a interrogarse por las causas de fondo que explican este fenómeno para discernir en donde se requieren ajustes y rectificaciones.

El cuadro de desaceleración pronunciada que vive la economía

El gobierno anterior, en su última ley de presupuesto estimaba un crecimiento potencial del 4,9 %. Una estimación desproporcionada, tal como lo denunciaran las actuales autoridades económicas y, en su momento, la propia candidata, teniendo a la vista el proceso de desaceleración económica de la región iniciado el año 2013, que ha golpeado con mayor o menor fuerza a los distintos países de la región y cuya profundidad y velocidad ha sorprendido por igual a los gobiernos y organismos internacionales, obligando a sucesivos recortes en las proyecciones de crecimiento de la región. Brasil crecerá menos de un 1% el presente año y el real se encuentra en sus mínimos históricos.

Venezuela tendrá un crecimiento regresivo de menos 4%. Argentina se encuentra en default técnico y enfrenta la amenaza de recesión. México, Perú, Uruguay han debido ajustar sus proyecciones de crecimiento.

En Chile la situación no es muy distinta. Las últimas proyecciones del Banco Central hablan de un crecimiento de 1,7 % para el presente año y un rango de crecimiento entre 2,5 y 3,5% para el año próximo, con tendencia a la baja. Y todo indica que se ha cerrado un ciclo de altos precios de las materias primas, que le permitiera a la región crecer a “tasas impetuosas” en la pasada década, impulsada por el dinamismo de la economía China, que hoy muestra signos de decaimiento, enfrentando a los países de la región a nuevos desafíos en materia económica para recuperar un dinamismo que se anuncia lento y dificultoso. Por último, falta aún por conocer los efectos que tendrá la baja del petróleo en la economía rusa y las eventuales repercusiones a nivel de la economía internacional.

Sin duda este escenario de desaceleración, que afortunadamente aún no impacta significativamente el empleo o los salarios, golpea de manera muy directa a los sectores de menores ingresos y las capas medias emergentes, que ven amenazadas sus muy recientes conquistas y progresos, generando temores e incertidumbres que, naturalmente, se revierten en contra de los gobiernos. Un 35,2% de los encuestados por Imaginación-Cooperativa- U. Central señalan la situación económica como el factor más influyente en la caída de la aprobación del gobierno, mientras que un 31,6% lo atribuyen a la reforma educacional, un 18% a la delincuencia y un 13,4% a los problemas de la salud.

La incertidumbre generada por las reformas

Las cúpulas empresariales y los dirigentes políticos de oposición, ignorando o minimizando los factores internacional que explican en buena medida el proceso de desaceleración económica que vive la región, insisten en adjudicar al llamado “frenesí legislativo” o “fiebre reformista”, asociado a un ánimo “refundacional” y el supuesto clima anti empresarial, el origen fundamental de la incertidumbre que generaría el proceso de desaceleración que hoy vive la economía nacional.

Y en alguna medida pueden tener razón. Sobre todo desde la óptica empresarial, en donde parecía que todo aquello que verdaderamente les interesa rescatar del legado del régimen militar, el modelo económico, las asimetrías sociales, los subsidios políticos, estaba legitimado, sucesivos proyectos de reformas económicas, políticas y sociales como la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral, la reforma del sistema binominal y el financiamiento de la política (sin mencionar la reforma de la salud o previsión), proyectan altos grados de incertidumbre o temores empresariales. En una

reciente columna de opinión, publicada en el diario El Mercurio por el sociólogo Eugenio Tironi, describía con precisión esta sensación de “acoso” que recorre al mundo empresarial.

Sin duda esta sensación de acoso e incertidumbre que recorre las filas del empresariado conspira en contra de los propósitos del gobierno de alcanzar una alianza público - privada para enfrentar la desaceleración económica y asumir el camino de la reactivación. Pero en este terreno la Presidenta Bachelet ha tenido el mérito de la franqueza, tal como quedó en evidencia en la reciente ENADE, al afirmar que su agenda de reformas es necesaria para asegurar una mayor cohesión social y un desarrollo inclusivo y sustentable y que es compatible con el esfuerzo reactivador.

Desgraciadamente este clima de incertidumbre y temor no sólo se instala en los sectores empresariales y de altos ingresos sino que avanza en amplios sectores medios, muchos de los cuales apoyaron y votaron por la actual Presidenta en la pasada campaña presidencial. En parte esos temores han sido alimentados por una intensa y por momentos maliciosa campaña mediática de descrédito y rechazo a la agenda reformista del gobierno. En otra parte, este temor o incertidumbre en las capas medias se explica por incapacidades del gobierno por comunicar eficiente y pedagógicamente el alcance de sus reformas y también por errores de diseño y gestión política de la agenda.

Ello es especialmente sensible en el terreno de la reforma educacional, en donde la aprobación ciudadana cae 26 puntos entre julio y noviembre (58 a 32%), en tanto que sube la desaprobación de 26 a 48 puntos. Datos refrendados por la encuesta CADEM-Plaza Pública en donde la desaprobación es 20 puntos superior a la aprobación, al igual que en la encuesta Adimark.

Tal como lo demuestra el análisis de las últimas encuestas realizado por el sociólogo Carlos Vergara, la caída de la aprobación de la Presidenta y su gobierno no tiene que ver con un vuelco político (*derechización* de la población), sino que con problemas en la forma como se están llevando algunas reformas y en especial la reforma educacional (como para prestar mayor atención a “las primeras intuiciones de la Presidenta”).

Problemas de gestión del Estado

Mucho se ha discutido en torno a la gestión política del gobierno. Del propio rol de la Presidenta, que algunos ven demasiado concentrado en los asuntos de Estado, delegando excesivo poder en la persona del Ministro del Interior y alejada de su propia coalición. Así por lo menos lo sostiene el ex parlamentario Gutenberg Martínez, convertido en uno de

los críticos del gobierno, que resiente la ausencia de una figura de su partido verdaderamente gravitante en la toma de decisiones políticas del gobierno.

La crítica puede ser injusta. En verdad, la Presidenta ha arriesgado buena parte de su capital político para apoyar su agenda de reformas y los ministros que están en la primera línea de fuego, como el propio titular de Educación, que recibe fuego cruzado de la oposición, los profesores, los estudiantes y sectores del propio oficialismo y a quién la Presidenta ha salido a respaldar sin vacilaciones, más allá de la frase sobre sus primeras intuiciones a propósito de la reforma educacional, que admite más de una interpretación. Pero, en verdad, existe más de un problema en la relación del gobierno con su propia coalición y las bancadas oficialistas, en donde no siempre han funcionado adecuados mecanismos de coordinación y gestión prelegislativa, preservando los necesarios equilibrios políticos en una coalición tan inédita, amplia y plural, como la Nueva Mayoría.

A nueve meses de asumir el poder y tras un complejo balance de su gestión, marcada por logros y avances significativos (poco difundidos) y algunos desaciertos, errores e insuficiencias y que aún no alcanza a marcar la diferencia para la vida cotidiana de las personas, el gobierno enfrenta el desafío de liderar el esfuerzo de la reactivación económica y compatibilizar su agenda de reformas con una mejor y mayor gestión del aparato del Estado, como ha insinuado la propia Presidenta (trabajar más y mejor). Sin duda ello refiere a un proceso de ajuste en los equipos de gobierno, que presumiblemente según versiones de prensa, partiría por los gobernadores e intendentes, directores y ejecutivos de los servicios públicos para culminar en un ajuste ministerial que muchos han pronosticado se realizaría en el mes de enero. Un ajuste para nada incompatible con la necesidad de redefinir las prioridades políticas y legislativas del gobierno, así como un cronograma que permita ordenar las filas del oficialismo.

La crisis de la política

Un punto menos relevado en el análisis de las encuestas dice relación con el descrédito y desprestigio de las instituciones políticas, en donde el Congreso Nacional aparece como la segunda institución peor evaluada, en tanto que los partidos políticos se ubican en último lugar con un 4,4 % de confianza ciudadana.

Al momento de evaluar a las coaliciones políticas la Alianza por Chile marca 10 puntos y la Nueva Mayoría 22, en tanto que el 57% dice no sentirse identificado o simpatizar con ninguna de las dos coaliciones. Más del 60% no se identifica con la derecha, el centro o la izquierda y tan sólo un 14% dice estar muy o bastante interesado en la política.

En nada contribuye al prestigio y credibilidad de los actores políticos las recientes denuncias de financiamiento ilegal de la actividad política que involucran al grupo Penta y que tiene su epicentro en la UDI, varios de cuyos parlamentarios se habrían visto favorecidos con estos aportes irregulares. El problema es que la opinión pública no necesariamente distingue y sólo ve una danza de millones en una relación viciosa entre dinero y política que afecta a todo el sistema político.

Muchos de estos problemas se originan en los cuestionados y controvertidos mecanismos de financiamiento de las campañas políticas que permiten a las personas jurídicas (empresas), que naturalmente defienden intereses y no ideas, realizar aportes reservados. Un mecanismo que el gobierno busca derogar en una reciente propuesta de reforma al financiamiento de la política.

Tampoco ayuda a la credibilidad y prestigio de la actividad política el debate sobre reajuste del sector público que favorece por igual a funcionarios con bajos sueldos y los sueldos más altos, entre los que se encuentran ministros, subsecretarios y parlamentarios. Finalmente no prosperaron las propuestas de limitar el reajuste para los sueldos mayores y las dietas parlamentarias se verán incrementadas en cerca de \$ 500.000 pesos. Una medida que puede resultar irritante para la mayoría de la población.

Finalmente, tanto los partidos como los parlamentarios parecen ensimismados en la descarnada administración y lucha por el poder, rencillas incomprensibles para la opinión pública y escasa capacidad para representar las demandas ciudadanas, abriendo una senda peligrosa para la emergencia de populismos de diverso signo.

Tanto el gobierno como los partidos, oficialistas y de oposición, comparten una misma responsabilidad para enfrentar el deterioro y pérdida de credibilidad y confianza en la actividad política con medidas eficientes para hacer más transparente y democrática su vida interna, sus fuentes de financiamiento, los mecanismos de diálogo con sus representados, la forma de procesar sus diferencias y construir consensos, así como de rendir cuentas públicas de sus desempeños.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA

FUNDACIÓN INSTITUTO IGUALDAD

(Este informe es elaborado por el equipo del Taller de Coyuntura, pero no necesariamente representa la opinión institucional de las dos fundaciones)